TRATADO DE ASISTENCIA JUDICIAL RECÍPROCA EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA

$\underline{\mathbf{Y}}$

LA REPÚBLICA TUNECINA

La República Argentina y la República Tunecina, en adelante denominadas "las Partes".

Con el deseo de reforzar y diversificar los lazos que unen a sus dos países y establecer reglas relativas a la asistencia judicial recíproca en materia civil y comercial y en materia del derecho laboral.

Han acordado lo siguiente:

Ámbito de Aplicación

Artículo 1

El presente Tratado tiene por objeto la asistencia judicial mutua en materia civil y comercial y en materia de derecho laboral.

Las Partes se acuerdan la asistencia más amplia conforme a las siguientes disposiciones.

<u>Protección Judicial</u> <u>y Libertad de Acceso a los Tribunales</u>

Artículo 2

Los nacionales y los residentes permanentes de una de las Partes gozarán, en las mismas condiciones que los nacionales y los residentes permanentes de la otra Parte, de libre acceso a los tribunales en ese Estado a fin de defender sus derechos e intereses.

El párrafo precedente se aplicará a las personas jurídicas constituidas, autorizadas o inscriptas conforme a la ley de una de las Partes.

Dispensa de la Caución (Judicatum Solvi)

Artículo 3

No se podrá imponer ninguna caución o depósito, sea cual fuera su denominación, por su calidad de nacional o residente permanente del otro Estado Parte.

El párrafo precedente se aplicará a las personas jurídicas constituídas, autorizadas o inscriptas conforme a las leyes de una de las Partes.

Asistencia Judicial Gratuita

Artículo 4

Los nacionales de cualquiera de las Partes gozarán en la otra Parte de los beneficios de la asistencia judicial que reciben sus nacionales, siempre que se adecuen a la legislación del Estado en el cual se solicita dicha asistencia.

Artículo 5

El certificado que comprueba la insuficiencia de recursos será entregado al requirente por medio de la autoridad competente del lugar de su residencia habitual, si reside en el territorio de una de las Partes.

Ese certificado será entregado por el agente diplomático o consular de la Parte a la que pertenece el requirente, si éste último reside en un tercer Estado.

Artículo 6

Para entregar el certificado que comprueba la insuficiencia de recursos, la autoridad competente podrá pedir información sobre la situación económica del requirente a las autoridades del Estado del que es nacional.

La autoridad competente encargada de resolver sobre el pedido de asistencia judicial gratuita no estará obligada por el mencionado certificado y podrá pedir siempre informaciones complementarias.

Artículo 7

Cuando el requirente se encuentre en un Estado que no es aquél donde debe ser solicitada la asistencia judicial gratuita, su solicitud, acompañada por todos los documentos justificativos, podrá ser transmitida por medio de los agentes diplomáticos o consulares del Estado del que tiene la nacionalidad a la autoridad competente para resolver el mencionado pedido.

Intercambio de Informaciones Jurídicas

Artículo 8

Las Autoridades Centrales de las Partes intercambiarán, sin gasto alguno, dentro del marco de su cooperación judicial y siempre que no haya oposición con su orden público, las informaciones en materia civil, comercial, de derecho laboral, de derecho administrativo así como de derecho internacional privado.

Las Autoridades Centrales mencionadas son:

- Por la Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
- Por Túnez, el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos.

Artículo 9

La información contemplada en el artículo anterior podrá también, ser presentada ante la jurisdicción de la Parte requirente, por intermedio de las autoridades diplomáticas o consulares de la Parte requerida.

Artículo 10

El Estado que suministra información sobre el sentido y el alcance legal de su Derecho, no asumirá responsabilidad alguna sobre la base de la información entregada y no se obligará en razón de su propia respuesta.

El Estado que recibe estas informaciones no estará obligado a aplicar o a hacer aplicar el Derecho de la otra Parte según el contenido de la respuesta recibida.

Notificación de Actos Judiciales y Extrajudiciales

Artículo 11

Las autoridades competentes de una de las Partes notificarán, a pedido de las autoridades competentes de la otra Parte, los actos judiciales o extrajudiciales referidos a personas que se encuentren en su propio territorio, y lo transmitirán por la vía diplomática.

Artículo 12

Las disposiciones del presente artículo no se oponen al derecho de cada una de las Partes en hacer llegar directamente, por medio de sus agentes diplomáticos o consulares, todas las actas y piezas judiciales o extrajudiciales destinadas a sus propios nacionales.

En caso de conflicto de legislaciones, la nacionalidad del destinatario se determinará conforme a la ley del Estado en cuyo territorio deberá tener lugar la entrega.

Artículo 13

El pedido estará acompañado por el acta o la pieza de notificación en dos ejemplares y deberá incluir las indicaciones siguientes:

- -autoridad que origina el acta o la pieza
- -carácter del acta o de la pieza de notificación
- -una exposición resumida de los hechos
- -nombre y domicilio del destinatario.

Artículo 14

El pedido de notificación así como el acta de notificación estarán redactados en el idioma de la Parte requirente y acompañados de una traducción al idioma de la Parte requerida.

Artículo 15

La Parte requerida procederá a la notificación por simple entrega del acta o de la pieza al destinatario, sea por vía administrativa, sea por envío postal, como correo certificado con acuse de recibo.

La prueba de notificación se hará por medio de un recibo fechado y firmado por el destinatario, como por un acuse de recibo postal, o como por una declaración de la Parte requerida constatando el hecho, la forma y la fecha de la notificación, prueba que debe encontrarse en uno de los duplicados del acta o del documento de notificación o que se deberá anexar al mismo.

Tanto uno como otro de los documentos será inmediatamente transmitido a la Parte requirente por vía diplomática.

Si no se ha podido hacer la notificación, la Parte requerida enviará de nuevo el acta a la Parte requirente por la vía diplomática, indicando los motivos que impidieron dicha notificación.

Artículo 16

Las notificaciones no podrán dar lugar a reembolso de impuestos o de gastos de ningún tipo.

Artículo 17

La ejecución de la notificación podrá ser denegada por la Parte requerida si ésta considera que la notificación, por su naturaleza, puede atentar contra su soberanía, su seguridad, su orden público o algún otro interés esencial.

La notificación pedida no podrá ser denegada por la sola razón de que la Parte requerida reivindique la competencia exclusiva de sus jurisdicciones en el asunto por el cual se solicita la notificación o que su legislación no contemple dicho procedimiento.

Artículo 18

Las disposiciones de los artículos precedentes no se oponen al derecho que tienen los interesados que residen en el territorio de una de las Partes de hacer llegar o de entregar directamente todas las actas a personas que residen en el territorio de la otra Parte, con la condición de que la entrega tenga lugar según las formas en vigencia en el Estado donde deberá realizarse.

Artículo 19

Cuando un acto introductorio de instancia en materia civil, comercial o de derecho laboral deba notificarse al demandado en el otro Estado y éste no se presenta o no se hace representar, la autoridad competente de la Parte requirente no resolverá sin haber constatado que el acto introductorio de instancia ha sido:

a- notificado al demandado usando una de las vías previstas en el presente Tratado o

b- efectivamente entregada al demandado.

La notificación o la entrega debe realizarse con el plazo suficiente para que el demandado pueda preparar su defensa.

Asimismo la autoridad competente de la Parte requirente aplazará la decisión por un período que no supere los ocho (8) meses, a partir de la fecha de transmisión del pedido de notificación del acto introductorio de instancia a la autoridad competente de la otra Parte.

La Parte requirente no estará obligada a respetar esa demora si resulta incompatible con su legislación interna.

Deberá, además, constatar que todas las medidas han sido tomadas para permitir el examen del pedido según las condiciones previstas en el párrafo primero del presente artículo.

Las disposiciones del presente artículo no se opondrán a la aplicación de los plazos previstos para las notificaciones de las decisiones relativas a medidas provisorias, éstas seguirán regidas por la legislación interna de la Parte requirente.

Exhortos

Artículo 20

La autoridad judicial competente de una de las Partes podrá, conforme a las disposiciones de su legislación, enviar un exhorto a la autoridad judicial competente de la otra Parte para pedirle que cumpla con actos judiciales tales como interrogatorio de testigos, designación de peritos y el establecimiento de constataciones judiciales. El exhorto se transmitirá por vía diplomática.

El exhorto deberá incluir las indicaciones mencionadas en el artículo 13 del presente Tratado.

Artículo 21

El exhorto será redactado en el idioma de la Parte requirente y se acompañará de una traducción al idioma de la Parte requerida.

Artículo 22

El exhorto se ejecutará conforme a la legislación de la Parte requerida y se transmitirá, sin demora, a la Parte requirente por la vía diplomática, con las piezas vinculadas a su ejecución.

Cuando no se pueda ejecutar el exhorto, la Parte requerida informará de inmediato a la Parte requirente, por la vía diplomática, indicando los motivos de su incumplimiento.

Artículo 23

En respuesta a un pedido expreso de la Parte requirente, la Parte requerida deberá:

- a- asegurar la ejecución del exhorto de una forma especial, si ese procedimiento no es contrario a su legislación;
- b- informar, en un plazo razonable, a la Parte requirente la fecha y el lugar donde se ejecutará el exhorto, con el objeto de que las partes interesadas puedan asistir en las condiciones previstas por la ley en vigencia en el Estado donde tendrá lugar la ejecución.

Artículo 24

La Parte requerida puede negarse a ejecutar un exhorto cuando éste, por su naturaleza, atente contra su soberanía, su seguridad, su orden público o algún otro interés esencial.

No se podrá negar la ejecución por la única razón de que la Parte requerida quiera reinvindicar la competencia exclusiva de su jurisdicción en la causa por la cual se pide el exhorto o porque su legislación no contempla ese procedimiento.

Artículo 25

Si la autoridad requerida no es competente, ésta transmitirá de oficio el exhorto a la autoridad que resulte competente en la Parte requerida, según lo establecido por la legislación de esta última. La Parte requerida informará, sin demora, a la Parte requirente cuál es la autoridad competente en donde quedó radicado el exhorto.

Artículo 26

La ejecución de un exhorto no podrá dar lugar al cobro de impuestos o cualquier otro tipo de gastos.

Sin embargo, la Parte requerida podrá pedir a la Parte requirente el reembolso de los honorarios de peritos o intérpretes así como los gastos ocasionados por la utilización de un procedimiento especial en el caso previsto por el artículo 23, párrafo (a).

En caso que el particular requirente acepte el costo de los gastos, la Parte requirente y la Parte requerida se pondrán de acuerdo en el procedimiento del reembolso de los gastos de la medida solicitada, dentro de la mayor brevedad.

Reconocimiento de fallos judiciales

Artículo 27

Los fallos dictados por las jurisdicciones de una de las Partes serán reconocidos en el otro Estado cuando éstos tengan fuerza de cosa juzgada.

Se entiende por fallos todas las decisiones judicales sea cual fuera su denominación y su naturaleza, así como los laudos arbitrales.

Se agregan a los fallos judiciales, para la Parte Tunecina las sentencias de los escribanos forenses que fijan, en última instancia, el monto de los gastos del proceso.

Artículo 28

El reconocimiento del fallo no podrá ser denegado a menos que:

- a- las jurisdicciones del Estado de origen no sean reconocidas competentes en el sentido de las reglas que rigen la competencia jurisdiccional en el Estado requerido;
- b- este reconocimiento sea contrario al orden público de la Parte requerida;
- c- el fallo sea el resultado de maniobras fraudulentas;
- d- una demanda con el mismo objeto y fundada en la misma causa esté pendiente entre las mismas partes ante una jurisdicción de la Parte requerida y que se haya presentado primero ante ésta.
- e- el fallo sea contrario a un fallo que ha sido dictado en el Estado requerido, donde ha adquirido fuerza de cosa juzgada.

El reconocimiento del fallo también podrá ser denegado, si el acto introductorio de instancia no ha sido notificado al demandado, conforme a la legislación del

Estado de origen, o cuando el demandado se encontrara, en el momento de la introducción de la instancia, en el territorio de la Parte requerida, y no ha sido notificado por una de las vías previstas por las disposiciones del presente Tratado. El reconocimiento podrá también ser denegado si el demandado prueba que, sin negligencia de su parte, no ha podido tomar conocimiento en tiempo útil del acto introductorio de instancia, aunque éste le haya sido notificado conforme a uno de los modos indicados en el presente Tratado.

Artículo 29

El reconocimiento no podrá ser denegado por el sólo motivo de que la jurisdicción que ha dictado el fallo aplicara, según las reglas de su derecho internacional privado, otras leyes que no son aquellas que hubieran sido las aplicables según las reglas de derecho internacional privado de la Parte requerida.

Artículo 30

Cuando un fallo dictado en el territorio de una de las Partes es invocado en el otro Estado, no podrá ser objeto de ningún examen fuera del de los motivos de denegación previstos en el Artículo 28.

Ejecución de Fallos Judiciales

Artículo 31

Los fallos judiciales ejecutorios en uno de los dos Estados, y pasibles de ser reconocidos en el otro Estado conforme a las disposiciones del título precedente, serán ejecutados en ese Estado después de ser declarados como ejecutorios.

Artículo 32

El procedimiento de exequátur así como sus efectos estarán regidos por la legislación del Estado de ejecución.

Artículo 33

El pedido de exequátur puede ser introducido por toda persona que, por su calidad, pueda prevalerse del fallo del Estado de origen.

Artículo 34

La parte que pide el exequatur debe presentar:

- a- una copia autenticada del fallo motivado que reúna, según la legislación del Estado de origen, las condiciones necesarias para su autenticidad;
- b- todo documento que establezca el carácter de ejecutorio del fallo según la legislación del Estado de origen;
- c- todo documento que establezca, según la legislación del Estado de origen, que el fallo tiene fuerza de cosa juzgada;
- d- el original o una copia certificada del documento constatando que el acto introductorio de instancia ha sido notificado al demandado conforme a la legislación del Estado de origen o, si es el caso, por medio de las vías previstas por las disposiciones del presente Tratado en caso de no comparecencia del demandado;
- e- una traducción al idioma del Estado de ejecución de los documentos mencionados arriba.

No se requerirá de ninguna legalización ni de otra formalidad análoga para los documentos enumerados arriba.

Artículo 35

El tribunal ante el cual se somete el pedido de exequatur se limitará a verificar: a.-que los documentos requeridos, según los términos del artículo 34, han sido entregados.

b.-que no existe ninguno de los motivos de denegación previstos en el primero y el segundo párrafo del artículo 28.

Artículo 36

El tribunal podrá acordar el exequatur parcialmente:

a-Si la decisión alcanza a uno o varios de los temas principales de la demanda y si el demandante solicita el exequatur para uno o varios de los temas principales de la demanda o sólo para una parte de uno de ellos;

b-Si la decisión se refiere a varios objetos principales de la demanda y si el pedido de exequatur se justifica sólo para uno o varios de ellos.

Artículo 37

Cuando una demanda que tiene el mismo objeto y la misma causa esté ya pendiente entre las mismas partes ante la jurisdicción de una de las dos Partes, las jurisdicciones de la otra Parte podrán, a solicitud de una de las partes, o rechazar la demanda o diferir su resolución si de ella puede resultar un fallo que será reconocido por el otro Estado.

Sin embargo, las medidas provisorias o conservatorias previstas por la legislación de cada Parte podrán, en caso de urgencia, ser solicitadas a las jurisdicciones de cada una de las dos Partes, sea cual sea la jurisdicción ante la cual se ha sometido la causa en litigio.

Disposiciones Finales

Artículo 38

Las controversias relativas a la aplicación y a la interpretación del presente Tratado serán resueltas por la vía diplomática.

Artículo 39

El presente Tratado entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha en que las Partes hayan intercambiado los instrumentos de ratificación y tendrá una duración indefinida.

Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Tratado en cualquier momento, mediante notificación escrita, dirigida a la otra por la vía diplomática con una anticipación de seis (6) meses, al cabo de los cuales cesará su vigencia.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Tratado.

Hecho en Buenos Aires, el día 16 de marzo de 2006 en dos ejemplares originales, en los idiomas español, árabe y francés, siendo ambos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la interpretación, prevalecerá el texto francés.

Por la República Argentina

Por la República Tunecina

اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية المرجنتين والجمهورية التونسية

إن جمهورية الأرجنتين و الجمهورية التونسية المشار إليهما فيما يلى "بالطرفين"

رغبة منهما في توطيد العلاقات التي تربط بلديهما وتوسيعها إلى مختلف المجالات، وفي إرساء قواعد تتعلق بالتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية وفي مادة قانون الشغل.

اتفقتا على الأحكام التالية:

ميدان التطبيق

المادة 1

يخص موضوع هذه الإتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية وفي مادة قانون الشغل.

ويتبادل الطرفان المساعدة على أوسع نطاق وفقا للأحكام التالية.

الحماية القضائية وحرية التقاضي

المادة 2

يتمتع المواطنون والأشخاص المقيمون بصفة دائمة بدولة أحد الطرفين بحرية التقاضي لدى محاكم الطرف الآخر للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وذلك بنفس الشروط المفروضة على مواطنى هذه الدولة والأشخاص المقيمين بصفة دائمة بها.

تتسحب الفقرة السابقة على الذوات المعنوية المؤسسة أو المرخص لها أو المرسمة وفقا لقانون أحد الطرفين.

الإعفاء من كفالة حق التقاضي

المادة 3

لا يمكن فرض أية كفالة أو تأمين مهما كان نوعه على المتقاضي لصفته مواطنا للدولة المتعاقدة الأخرى أو مقيما دائما بها.

وتنطبق الفقرة السابقة على الذوات المعنوية المؤسسة أو المرخص لها أو المرسمة وفقا لقوانين أحد الطرفين.

الاعانة العدلية المجانية

المادة 4

يتمتع كل من مواطني الطرفين فوق تراب الطرف الآخر بما يتمتع به مواطنوه أنفسهم من إعانة عدلية بشرط احترامهم لقانون الدولة المطلوب فيها الإعانة.

<u>المادة 5</u>

تسلّم شهادة عدم كفاية الموارد من السلطة المختصة بمكان الإقامة العادية للطالب إذا كان يقيم بتراب أحد الطرفين.

وتسلم هذه الشهادة من العون الدبلوماسي أو القنصلي للطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه الطالب إذا كان هذا الأخير مقيما بدولة أخرى.

المادة 6

يمكن للسلطة المختصة بتسليم شهادة عدم كفاية الموارد أن تطلب من سلطات الدولــة التي ينتمي إليها الطالب معلومات حول وضعيته المادية.

لا تتقيد السلطة المختصة المكلفة بالنظر في طلب الإعانة العدلية بالشهادة المذكورة، ويمكنها دائما طلب إرشادات تكميلية.

المادة 7

إذا كان الطالب متواجدا بدولة غير تلك التي يتعين تقديم طلب الإعانة العدلية المجانية فيها، فإنه يمكن للأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين للدولة التي يحمل الطالب جنسيتها توجيه الطلب مرفوقا بكل الوثائق المؤيدة، إلى السلطة المختصة بالنظر فيه.

تبادل المعلومات القانونية

المادة 8

تتبادل السلطات المركزية للطرفين وبدون مصاريف، المعلومات في المسادة المدنية والتجارية وفي مادة قانون الشغل، والقانون الإداري وكذلك في مادة القانون الدولي الخاص؛ ويتم ذلك في إطار التعاون القضائي القائم بينهما ما لم يتعارض مع النظام العام لكل دولة منهما.

السلطات المركزية هي:

- وزارة العدل وحقوق الإنسان بالنسبة لتونس
- وزارة العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والشعائر بالنسبة للأرجنتين.

المادة 9

يمكن تقديم المعلومة، المشار إليها بالمادة السابقة، لدى محكمة الطرف الطالب بواسطة السلطات الدبلوماسية أو القنصلية للطرف المطلوب إليه.

المادة 10

لا تتحمل الدولة التي تقدم معلومات حول مفهوم تشريعها ونطاقه القانوني، أية مسؤولية بفعل المعلومة التي قدمتها ولا تتقيد بردها.

و لا تكون الدولة المتلقية للمعلومات مجبرة على تطبيق أو على الإذن بتطبيق قانون الطرف الآخر، وفقا لمضمون الرد الذي تم تلقيه.

تبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية

المادة 11

تبلّغ السلط المختصة لأحد الطرفين ، بناء على طلب السلط المختصة للطرف الآخر، الوثائق القضائية أو غير القضائية الموجهة إلى أشخاص يتواجدون على ترابها، والتي تمت إحالتها إليها بالطريقة الدبلوماسية.

المادة 12

لا تتعارض أحكام هذه المادة مع حق كل من الطرفين في أن يبلّـغ بواسـطة أعوانـه الدبلوماسيين أو القنصليين مباشرة، كل الوثائق القضائية أو غير القضائية الموجهة إلى مواطنيه.

وفي صورة تنازع التشريعات، فإنه يتم تحديد جنسيّة المرسل إليه وفقا لقانون الدولة التي يجب أن يتم على ترابها تسليم الوثيقة.

المادة 13

يرفق الطلب بنظيرين من الوثيقة المطلوب تبليغها ويجب أن يشتمل على البيانات التالية:

- _ السلطة الصادرة عنها الوثيقة
- ــ نوع الوثيقة المطلوب تبليغها
 - ـ عرض موجز للوقائع
 - ــ إسم المرسل إليه وعنوانه.

المادة 14

يحرر طلب التبليغ وكذلك الوثيقة المطلوب تبليغها في لغة الطرف الطالب وترفق بترجمة بلغة الطرف المطلوب إليه التبليغ.

المادة 15

يقوم الطرف المطلوب إليه بالتبليغ إمّا بمجرد تسليم الوثيقة للمرسل إليه أو بالطريقة الإدارية أو عن طريق البريد بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويثبت التبليغ إمّا بوصل مؤرخ وممضى من المرسل إليه أو بواسطة الإعلام بالبلوغ البريدي، أو بتصريح صادر عن الطرف المطلوب إليه يشير فيه إلى وقوع التبليغ وطريقته وتاريخه.

ويتم التنصيص على ذلك على نظير الوثيقة المطلوب تبليغها، أو يرفق بها دليل التبليغ.

ويوجه الإعلام بالبلوغ فورا للطرف الطالب بالطريقة الدبلوماسية وإذا لم يتسنّ التبليغ، فإن الطرف المطلوب إليه يرجع الوثيقة للطرف الطالب بالطريقة الدبلوماسية مع بيان الأسباب التي حالت دون ذلك.

<u>المادة 16</u>

لا يترتب عن التبليغ إرجاع أية أداءات أو مصاريف مهما كان نوعها.

المادة 17

يمكن للطرف المطلوب إليه رفض التبليغ إذا اعتبر أن من شأنه أن يمس بسيادته، أو بأمنه، أو بنظامه العام أو بمصالح جوهرية أخرى.

لا يمكن رفض طلب التبليغ لمجرد تمسك الطرف المطلوب إليه بإختصاص محاكمه لوحدها بالنظر في القضية المطلوب من أجلها التبليغ، أو لكون تشريعه لا ينص على مثل هذا الإجراء.

المادة 18

لا تحول أحكام المواد السابقة دون حق المعنيين بالأمر المقيمين على تراب أحد الطرفين في تبليغ أو تسليم كل الوثائق مباشرة لأشخاص يقيمون على تراب الطرف الآخر، بشرط أن يتم التسليم وفقا للصيغ النافذة بالدولة التي يجب أن يقع فيها.

<u>المادة 19</u>

إذا تعين تبليغ عريضة دعوى في المادة المدنية والتجارية أو في مادة قانون الشغل، للمطلوب بالدولة الأخرى، ولم يحضر أولم يعين من يمثله، فإن السلطة المختصة للطرف الطالب لا تبت قبل التثبت من كون عريضة الدعوى تم :

أ _ إعلام المطلوب بها وفق طريقة منصوص عليها بهذه الإتفاقية، أو ب _ تسليمها فعلا للمطلوب.

ويجب أن يتم الإعلام أو التسليم في أجل يكفي لتمكين المطلوب من إعداد أوجه دفاعه.

وفي كل الأحوال لا يجب أن يتجاوز الأجل، التي توقف خلاله السلطة المختصة للطرف الطالب النظر في القضية، ثمانية أشهر بداية من تاريخ توجيه طلب الإعلام بعريضة الدعوى إلى السلطة المختصة للطرف الآخر.

و لا يتقيد الطرف الطالب بهذا الأجل إذا إتضح أنه لا يتوافق مع تشريعه الداخلي.

وعليه أن يتأكد من أن كل التدابير قد إتخذت ليتسنى النظر في القضية بالشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

و لا تحول أحكام هذه المادة دون تطبيق الأجال المنصوص عليها للإعالم بالأحكام المتعلقة بالوسائل الوقتية التي تبقى خاضعة للتشريع الداخلي للطرف الطالب.

الإنابات العدلية

المادة 20

يمكن للسلطة القضائية المختصة لأحد الطرفين أن توجه، وفقا لأحكام تشريعها، إنابة عدلية للسلطة القضائية المختصة للطرف المتعاقد الآخر قصد طلب إنجاز أعمال قضائية مثل سماع الشهود وإنتداب الخبراء وتحرير المعاينات القضائية، وتوجه الإنابة العدلية بالطريقة الدبلوماسية.

ويجب أن تشتمل الإنابة العدلية على البيانات المشار إليها بالمادة 13 من هذه الإتفاقية.

المادة 21

تحرر الإنابة العدلية بلغة الطرف الطالب وترفق بترجمة بلغة الطرف المطلوب إليه التنفيذ.

المادة 22

تنفذ الإنابة العدلية وفقا لتشريع الطرف المطلوب إليه ، وتوجه فورا للطرف الطالب بالطريقة الدبلوماسية مع الوثائق المتعلقة بالتنفيذ.

إذا تعذر تنفيذ الإنابة العدلية فإن الطرف المطلوب إليه يعلم فورا الطرف الطالب بالطريقة الديبلوماسية مع بيان أسباب عدم التنفيذ.

المادة 23

يجب على الطرف المطلوب إليه وبناء على طلب صريح من الطرف الطالب:

أ _ أن يتولى تنفيذ الإنابة العدلية وفق صيغة خاصة، إذا لم يتعارض هذا الإجراء مـع تشريعه.

ب _ أن يعلم الطرف الطالب في الوقت المناسب بالتاريخ والمكان الذي سـتنفذ فيهمـا الإنابة العدلية، حتى يتسنى للأطراف المعنية الحضور وفقا للشروط المنصوص عليها بالقـانون المعمول به بالدولة التي يجب أن يتم فيها التنفيذ.

المادة 24

يمكن للطرف المطلوب إليه أن يرفض تتفيذ إنابة عدلية، إذا كان من شانها المساس بسيادته، أو بأمنه، أو بنظامه العام، أو بمصالح جوهرية أخرى.

ولا يمكن رفض التنفيذ لمجرد كون الطرف المطلوب إليه يتمسك بإختصاص محاكمه المطلق بالنظر في القضية المطلوب من أجلها تنفيذ الإنابة العدلية أو أن تشريعه لا ينص على مثل هذا الإجراء.

المادة 25

إذا لم تكن المحكمة المطلوب منها التنفيذ مختصة بالنظر، فإنها تحيل من تلقاء نفسها الإنابة العدلية إلى المحكمة المختصة للطرف المطلوب منه التنفيذ وفقا للقواعد المقررة في تشريعه.

وتعلم بذلك فورا الطرف الطالب، وتبين له المحكمة التي تم توجيه الطلب إليها.

المادة 26

لا يمكن أن يتيح تتفيذ الإنابة العدلية قبض أداءات أو مصاريف مهما كان نوعها.

غير أنه يمكن للطرف المطلوب إليه أن يطالب الطرف الطالب بإرجاع أجور الخبراء أو المترجمين وكذلك المصاريف الناجمة عن إتباع صيغة خاصة، في صورة المادة 23 فقرة (أ)، يقوم الطرف الطالب،قبل تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة، بمطالبة الطرف المطلوب إليه، بإعلامه بقيمة المصاريف وبوسائل الدفع حتى يتسنى له إشعار طالب الإجراء بذلك.

وفي صورة قبول المعني بالأمر تحمّل المصاريف، فإن الطرف الطالب والطرف المطلوب اليه يتفقان على إجراءات استرجاع تلك المصاريف وتنفيذ الإجراء المطلوب في أنسب الآجال.

الإعتراف بالأحكام القضائية

المادة 27

يعترف في الدولة الأخرى بالأحكام التي تصدرها محاكم أحد الطرفين إذا إكتسبت قوة الشيء المقضى به.

يقصد بالحكم، كل حكم قضائي مهما كانت تسميته ونوعه وكذلك القرارات التحكيمية.

وتشبه بالأحكام القضائية، بالنسبة للطرف التونسي، تنصيصات كتبة المحاكم التي تحدد لاحقا مبلغ مصاريف التقاضي.

<u>المادة 28</u>

لا يمكن رفض الإعتراف بالحكم إلا :

أ _ إذا لم تكن محاكم الدولة التي أصدرته مختصة طبقا للقواعد المنظمة للإختصاص القضائي في الدولة المطلوب إليها.

ب _ إذا كان الإعتراف مخالفا للنظام العام للطرف المطلوب إليه.

ج _ إذا صدر الحكم نتيجة خز عبلات.

د _ إذا كانت هناك دعوى لها نفس الموضوع ومبنية على نفس السبب، منشورة بين نفس الأطراف أمام محكمة الطرف المطلوب منه التنفيذ بشرط أن تكون هذه الأخيرة قد تعهدت هي الأولى بالقضية.

هـ _ إذا كان الحكم مخالفا لحكم صادر بالدولة المطلوب إليها واحرز فيها على قوة الشيء المحكوم فيه.

يمكن كذلك رفض الإعتراف بالحكم، إذا لم يتم إبلاغ عريضة الدعوى للمطلوب وفقا لتشريع دولة المصدر أو لم يتم إبلاغها بإحدى الطرق المنصوص عليها ضمن أحكام هذه الإتفاقية، في صورة تواجد المطلوب على تراب الطرف المطلوب إليه زمن القيام بالدعوى. ويمكن رفض الإعتراف أيضا إذا أثبت المطلوب أنّه لم يتمكن من العلم في الوقت المناسب بعريضة الدعوى، وذلك دون تقصير من جانبه، ورغم إبلاغه إياها وفقا لإحدى الطرق المنصوص عليها أعلاه.

المادة 29

لا يمكن رفض الإعتراف لمجرد كون المحكمة التي أصدرت الحكم قد طبقت وفقا لأحكام القانون الدولي الخاص، قوانين أخرى غير تلك المنطبقة وفقا لأحكام القانون الدولي الخاص للطرف المطلوب إليه.

المادة 30

إذا وقع في الدولة الأخرى الإحتجاج بحكم صادر بتراب أحد الطرفين، فإنه لا يجوز إخضاع هذا الحكم لأية مراقبة غير مراقبة أسباب رفض الإعتراف المنصوص عليها بالمادة .28

تنفيذ الأحكام العدلية

المادة 31

تنفذ بالدولة الأخرى بعد التصريح بكونها نافذة فيها، الأحكام العدلية النافذة بإحدى الدولتين المتعاقدتين والقابلة للإعتراف بها وفقا لأحكام العنوان السابق.

المادة 32

تخضع إجراءات الإكساء بالصبغة التنفيذية وآثارها لتشريع الدولة التي يتم فيها التنفيذ.

المادة 33

يمكن لكل شخص له صفة التمسك بمقتضيات حكم الدولة التي أصدرته تقديم طلب في الإكساء بالصيغة التنفيذية.

المادة 34

على الطرف الذي يطلب الإكساء بالصيغة التنفيذية أن يدلى بـ :

أ ــ نسخة من الحكم المعلل تتوفر فيها، حسب تشريع الدولة التي سلمتها، الشروط الضرورية لتكتسى صبغة الحجة الرسمية.

ب ــ كل وثيقة تثبت أن الحكم قابلا للتنفيذ وفقا لتشريع الدولة التي أصدرته.

ج _ كل وثيقة تثبت أن الحكم إكتسب قوة الشيء المحكوم فيه وفقا لتشريع الدولة التي أصدرته.

د _ الأصل أو نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الوثيقة التي تشهد أنه تم تبليغ عريضة الدعوى للمطلوب وفقا لتشريع دولة الإصدار، أو، عند الإقتضاء، بإحدى الوسائل المنصوص عليها بأحكام هذه الاتفاقية وذلك عند عدم حضور المطلوب.

هـ ـ ترجمة بلغة دولة التنفيذ، للوثائق المنصوص عليها أعلاه.

تعفى الوثائق المذكورة أعلاه من كل تصديق أو أي إجراء آخر مماثل.

المادة 35

تقتصر المحكمة المتعهدة بطلب الإكساء بالصيغة التنفيذية على التأكد من:

أ _ الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها بالمادة 34.

ب ــ عدم وجود أي من أسباب الرفض المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 28.

المادة 36

يجوز للمحكمة أن تأذن بإكساء الحكم بالصيغة التنفيذية في جزء منه وذلك في الحالات التالية :

- اذا تعلق الحكم بفرع أو بعدة فروع من الدعوى ولم يتقدم الطالب بطلب التنفيذ
 إلا بالنسبة إلى فرع أو عدة فروع أو جزء فقط من أحدها.
- إذا تعلق الحكم بعدة فروع من الدعوى ولم يكن طلب الإكساء بالصيغة التنفيذية مبررًا إلا بالنسبة لأحدها أو أكثر.

المادة 37

إذا سبق نشر دعوى بين نفس الأطراف وكان لها نفس الموضوع والسبب، أمام محاكم أحد الطرفين، فإنه يجوز لمحاكم الطرف الآخر أن تتولى، بناء على طلب أحد الطرفين، إمّا رفض الدعوى أو النظر فيها إذا كان ممكنا إصدار حكم فيها يقبل الإعتراف به في الدولة الأخرى.

غير أنه يمكن في حال التأكد أن يطلب من محاكم كل من الطرفين، اتخاذ الوسائل الوقتية أو التحفظية المنصوص عليها بتشريع كل طرف؛ وذلك أيّا كانت المحكمة المتعهدة بأصل النزاع.

أحكام ختامية <u>المادة 38</u>

تقع تسوية الصعوبات المتعلقة بتطبيق وبتأويل هذه الاتفاقية بالطريقة الدبلوماسية.

المادة 39

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمرور ثلاثين يوما (30) من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يعلم به أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفاء إجراءاته الداخلية.

تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لأجل غير محدد.

يمكن لكل من الطرفين متى شاء إبلاغ الطرف الآخر بالطريقة الدبلوماسية قراره بوضع حد للعمل بهذه الاتفاقية، وفي هذه الحالة يتم إنهاء العمل بها بعد ستة أشهر من تاريخ تلقى الإشعار من الطرف الآخر.

وإثباتا لما تقدم وقع المندوبان المفوضان هذه الاتفاقية نيابة عن حكومتيهما.

وحرر ببوينوس أيريس في 16 ماي 2006 في نظيرين أصليين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية لكل منها نفس الحجية.

وفي صورة الاختلاف في التأويل يتم اعتماد النص الفرنسي.

عن جمهورية الأرجنتين

عن الجمهورية التونسية

روبارتو قارسيا موريتان كاتب الدولة للعلاقات الخارجية

سيدة الشتيوي، كاتبة الدولة للشؤون الأمريكية والآسيوية



TRAITE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ENTRE LA REPUBLIQUE ARGENTINE ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

La République Argentine et La République Tunisienne Ci-dessous nommées « les Parties »

Désireuses de raffermir et diversifier les liens qui unissent leurs deux pays et d'établir des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et en matière de droit du travail

Ont convenu des dispositions suivantes :

Champ d'application

Article 1

Le présent Traité a pour objet l'entraide judiciaire mutuelle en matière civile et commerciale et en matière de droit du travail.

Les Parties s'accordent la plus large assistance conformément aux dispositions qui suivent.

Protection judiciaire et liberté d'accès aux tribunaux

Article 2

Les ressortissants et les résidents permanents de l'une des Parties jouiront, dans les mêmes conditions que les ressortissants et les résidents permanents de l'autre Partie, du libre accès aux tribunaux dans cet Etat afin de défendre leurs droits et leurs intérêts.

Le paragraphe précédent s'appliquera aux personnes morales constituées, autorisées ou inscrites conformément à la loi de l'une des Parties.

Dépense de la caution (judicatum solvi)

Article 3

Aucune caution ou dépôt, quelque soit sa dénomination, ne pourra 'être imposée en raison de la qualité de ressortissant ou de résident permanent de l'autre Etat contractant.

Le paragraphe précédent s'appliquera aux personnes morales constituées, autorisées ou inscrites conformément aux lois de l'une des Parties.

Assistance judiciaire gratuite

Article 4

Les ressortissants de l'une des deux Parties seront admis dans l'autre Partie au bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la législation de l'Etat dans lequel l'assistance sera demandée.

Article 5

Le certificat attestant l'insuffisance des ressources sera délivré au requérant par l'autorité compétente du lieu de sa résidence habituelle s'il réside sur le territoire de l'une des deux Parties.

Ce certificat sera délivré par l'agent diplomatique ou consulaire de la Partie à laquelle appartient le requérant, si ce dernier réside dans un Etat tiers.

Article 6

L'autorité compétente pour délivrer le certificat attestant l'insuffisance des ressources pourra demander des renseignements sur la situation de fortune du requérant auprès des autorités de l'Etat dont il est le ressortissant.

L'autorité compétente chargée de statuer sur la demande d'assistance judiciaire ne sera pas liée par ledit certificat et pourra toujours demander des informations complémentaires.

Article 7

Lorsque le requérant se trouve dans un Etat autre que celui dans lequel l'assistance judiciaire gratuite doit être demandée, sa requête, accompagnée de toutes pièces justificatives, pourra être transmise par les agents diplomatiques ou consulaires de l'Etat dont il a la nationalité à l'autorité compétente pour statuer sur ladite requête.

Echange d'informations juridiques

Article 8

Les Autorités centrales des Parties échangeront, sans aucun frais, dans le cadre de leur coopération judiciaire et tant qu'elle ne s'oppose pas à leur ordre public, les informations en matière civile, commerciale, en matière de droit du travail, de droit administratif ainsi qu'en matière de droit international privé.

Les autorités centrales sont :

- Pour l'Argentine, le Ministère des Relations Extérieures, du Commerce International et du Culte.
- Pour la Tunisie, le Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme ;

Article 9

L'information visée par l'article précédent pourra être également fournie devant la juridiction de la Partie requérante, par l'intermédiaire des autorités diplomatiques ou consulaires de la Partie requise.

L'Etat qui fournit les informations sur le sens et la portée légale de son Droit, n'assumera aucune responsabilité du fait de l'information donnée et ne se liera pas par sa propre réponse.

L'Etat qui reçoit ces informations ne sera pas obligé d'appliquer ou de faire appliquer le Droit de l'autre Partie selon le contenu de la réponse reçue.

Signification des Actes judiciaires et extra-judiciaires

Article 11

Les Autorités compétentes de l'une des deux Parties signifieront, à la demande des autorités compétentes de l'autre Partie, les actes judiciaires ou extra-judiciaires destinés à des personnes se trouvant sur leur propre territoire, et qui sont transmis par la voie diplomatique.

Article 12

Les dispositions du présent article ne s'opposent pas au droit de chacune des deux Parties de faire parvenir directement, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, tous actes et pièces judiciaires ou extrajudiciaires destinés à ses propres nationaux.

En cas de conflit de législations, la nationalité du destinataire sera déterminée conformément à la loi de l'Etat sur le territoire duquel la remise doit avoir lieu.

Article 13

La demande sera accompagnée de l'acte ou de la pièce à notifier en double exemplaire et devra contenir les indications suivantes :

- l'autorité dont émane l'acte ou la pièce ;
- la nature de l'acte ou de la pièce à notifier ;
- un exposé sommaire des faits ;
- le nom et l'adresse du destinataire.

La demande de signification ainsi que l'acte à signifier seront rédigés dans la langue de la Partie requérante et accompagnés d'une traduction dans la langue de la Partie requise.

Article 15

La Partie requise fera procéder à la notification par simple remise de l'acte ou de la pièce au destinataire, soit par la voie administrative, soit par envoi postal sous pli recommandé avec accusé de réception.

La preuve de notification se fera au moyen, soit d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'un accusé de réception postal, soit d'une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la notification, preuve qui doit se trouver sur l'un des doubles de l'acte ou de la pièce à notifier ou qui doit y être annexée.

L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à la Partie requérante par la voie diplomatique.

Si la notification n'a pu se faire, la Partie requise renverra l'acte à la partie requérante par la voie diplomatique, en indiquant les motifs qui se sont opposés à cette notification.

Article 16

Les notifications ne pourront donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit.

Article 17

L'exécution de la notification pourra être refusée par la Partie requise si elle considère que la notification est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels.

La signification demandée ne pourra être refusée pour le seul motif que la Partie requise revendique la compétence exclusive de ses juridictions dans l'affaire pour laquelle la signification est demandée ou que sa législation ignore une telle procédure.

Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas au droit qu'ont les intéressés résidant sur le territoire de l'une des parties de faire parvenir ou de remettre directement tous actes à des personnes résidant sur le territoire de l'autre Partie, sous réserve que la remise ait lieu selon les formes en vigueur dans l'Etat où elle devra avoir lieu.

Article 19

Lorsqu'un acte introductif d'instance en matière civile, commerciale, ou de Droit de travail doit être signifié au défendeur dans l'autre Etat et qu'il ne se présente pas ou ne se fait pas représenter, l'autorité compétente de la Partie requérante ne statuera pas sans avoir constaté que l'acte introductif d'instance a été :

- a. signifié au défendeur par une voie prévue au présent Traité, ou
- b. effectivement remis au défendeur.

La signification ou la remise doit avoir lieu dans un délai suffisant pour mettre le défendeur en mesure de se défendre.

Toutefois, l'autorité compétente de la Partie requérante surseoira à statuer pendant un délai ne dépassant pas les huit mois à compter de la date de transmission de la demande de signification de l'acte introductif d'instance à l'autorité compétente de l'autre Partie.

La Partie requérante ne sera pas liée par ce délai s'il s'avère incompatible avec sa législation interne.

Elle devra, en outre, constater que toutes les mesures ont été prises pour permettre l'examen de la demande dans les conditions prévues au paragraphe premier du présent article.

Les dispositions du présent article ne s'opposeront pas à l'application des délais prévus pour les notifications des décisions relatives à des mesures provisoires, celles-ci demeurant régies par la législation interne de la Partie requérante.

Des Commissions rogatoires

Article 20

L'autorité judiciaire compétente de l'une des Parties pourra, conformément aux dispositions de sa législation, adresser une commission rogatoire à l'autorité judiciaire compétente de l'autre Partie pour lui demander d'accomplir des actes judiciaires tels que l'audition des témoins, la commission

d'experts, et l'établissement de constats judiciaires. La commission rogatoire sera transmise par la voie diplomatique.

La commission rogatoire devra contenir les indications mentionnées à l'article 13 du présent Traité.

Article 21

La commission rogatoire sera rédigée dans la langue de la Partie requérante et accompagnée d'une traduction dans la langue de la Partie requise.

Article 22

La commission rogatoire sera exécutée conformément à la législation de la Partie requise et transmise, sans délai, à la Partie requérante par la voie diplomatique avec les pièces relatives à son exécution.

Lorsque la commission rogatoire ne pourra pas être exécutée, la Partie requise en informera immédiatement la Partie requérante, par la voie diplomatique en indiquant les motifs de l'inexécution.

Article 23

Sur demande expresse de la Partie requérante, la Partie requise devra :

- a. assurer l'exécution d'une commission rogatoire selon une forme spéciale si cette procédure n'est pas contraire à sa législation ;
- b. informer, en temps utile, la Partie requérante de la date et du lieu où la commission rogatoire sera exécutée, afin que les parties intéressées puissent y assister dans les conditions prévues par la loi en vigueur dans l'Etat où l'exécution doit avoir lieu.

Article 24

La Partie requise peut refuser d'exécuter une commission rogatoire, lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public, ou à d'autres intérêts essentiels.

L'exécution ne pourra être refusée pour le seul motif que la Partie requise revendique la compétence exclusive de ses juridictions dans l'affaire pour

laquelle la commission rogatoire est demandée ou que sa législation ignore une telle procédure.

Article 25

Si la juridiction requise n'est pas compétente, elle transmettra d'office la commission rogatoire à la juridiction compétente de la Partie requise, selon les règles établies par la législation de cette dernière. Elle en informera, sans délai, la Partie requérante et lui indiquera la juridiction à laquelle la demande a été transmise.

Article 26

L'exécution d'une commission rogatoire ne pourra donner lieu à la perception de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit.

Toutefois la Partie requise pourra demander à la Partie requérante le remboursement des honoraires d'experts ou d'interprètes ainsi que des frais occasionnés par l'observation d'une forme spéciale dans le cas de l'article 23 paragraphe (a).

La Partie requérante demandera, avant la réalisation des mesures mentionnées dans le paragraphe précédent, à la Partie requise de connaître le coût des frais et des moyens de paiement afin d'en informer le particulier qui requiert la mesure.

Au cas où le particulier requérant accepterait de supporter les frais, la Partie requérante et la Partie requise se mettront d'accord sur la procédure de remboursement des frais et d'exécuter la mesure sollicitée, dans les meilleurs délais.

Reconnaissance des décisions judiciaires

Article 27

Les décisions rendues par les juridictions de l'une des deux Parties seront reconnues dans l'autre Etat lorsqu'elles sont passées en force de chose jugée. On entend par décision, toutes décisions judiciaires quelle qu'en soit la dénomination et la nature ainsi que les sentences arbitrales.

Sont assimilées aux décisions judiciaires, pour la Partie tunisienne, les décisions des greffiers fixant ultérieurement le montant des frais du procès.

La reconnaissance de la décision ne pourra être refusée que :

- a. si les juridictions de l'Etat d'origine ne sont pas reconnues compétentes au sens des règles régissant la compétence juridictionnelle dans l'Etat requis;
- si cette reconnaissance est contraire à l'ordre public de la Partie requise :
- c. si la décision est le résultat de manœuvres frauduleuses ;
- d. si une demande ayant le même objet est fondée sur la même cause est pendante entre les mêmes parties devant une juridiction de la Partie requise pourvu que celle-ci en ait été saisie la première ;
- e. si la décision est contraire à une décision qui a été rendue dans l'Etat requis et y a acquis force de chose jugée.

La reconnaissance de la décision pourra, en outre, être refusée, si l'acte introductif d'instance n'a pas été signifié au défendeur conformément à la législation de l'Etat d'origine, ou lorsque le défendeur se trouvait au moment de l'introduction de l'instance sur le territoire de la Partie requise, n'a pas été signifié par une des voies prévues par les dispositions du présent Traité. La reconnaissance pourra également être refusée si le défendeur prouve que, sans négligence de sa part, il n'a pu prendre connaissance en temps utile de l'acte introductif d'instance, bien que celui-ci lui ait été signifié conformément à l'un des modes indiqués ci-dessus.

Article 29

La reconnaissance ne pourra être refusée pour le seul motif que la juridiction qui a rendu la décision a, d'après les règles de son droit international privé, appliqué des lois autres que celle qui auraient été applicables d'après les règles de droit international privé de la Partie requise.

Article 30

Lorsqu'une décision rendue sur le territoire de l'une des deux Parties et invoquée dans l'autre Etat, elle ne pourra faire l'objet d'aucun examen autre que celui des motifs de refus prévus à l'article 28.

Exécution des décisions judiciaires

Article 31

Les décisions judiciaires exécutoires dans l'un des deux Etats et susceptibles d'être reconnues dans l'autre Etat conformément aux dispositions du titre précédent, seront exécutées dans cet Etat après y avoir été déclarées exécutoires.

Article 32

La procédure d'exequatur ainsi que ses effets seront régis par la législation de l'Etat d'exécution.

Article 33

La demande d'exequatur peut être introduite par toute personne ayant qu'alité pour se prévaloir de la décision de l'Etat d'origine.

Article 34

La partie qui demande l'exequatur doit produire :

- a. une expédition de la décision motivée réunissant, d'après la législation de l'Etat d'origine, les conditions nécessaires à son authenticité;
- tout document établissant que la décision est exécutoire selon la législation de l'Etat d'origine;
- c. tout document établissant que, selon la législation de l'Etat d'origine, la décision est passée en force de chose jugée ;
- d. l'original ou une copie certifiée conforme du document constatant que l'acte introductif d'instance a été signifié au défendeur conformément à la législation de l'Etat d'origine ou, le cas échéant, par une des voies prévues par les dispositions du présent Traité en cas de non comparution du défendeur;
- e. une traduction dans la langue de l'Etat d'exécution des documents mentionnés ci-dessus.

Aucune légalisation ni autre formalité analogue ne sera requise pour les documents ci-dessus énumérés.

Le tribunal saisi de la demande d'exequatur se bornera à vérifier :

- a. que les documents requis aux termes de l'article 34 ont été produits ;
- b. qu'il n'existe aucun des motifs de refus prévus aux premier et deuxième paragraphe de l'article 28.

Article 36

Le tribunal pourra accorder l'exequatur partiellement :

- Si la décision porte sur un ou plusieurs chefs de demande et si le demandeur requiert l'exequatur pour un ou plusieurs chefs de demande ou pour une partie seulement de l'un deux ;
- Si la décision se rapporte à plusieurs chefs de demande et si la demande d'exequatur n'est justifiée que pour l'un ou plusieurs d'entre eux.

Article 37

Lorsqu'une demande ayant le même objet et la même cause est déjà pendante entre les mêmes parties devant les juridictions de l'une des deux Parties, les juridictions de l'autre Partie pourront, à la requête de l'une des parties, soit rejeter la demande soit surseoir à statuer, s'il peut en résulter une décision qui sera reconnue dans l'autre Etat.

Toutefois, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la législation de chaque Partie, pourront, en cas d'urgence, être requises des juridictions de chacune des deux Parties, quelle que soit la juridiction saisie du fond du litige.

Dispositions finales

Article 38

Les difficultés relatives à l'application et à l'interprétation du présent Traité seront réglées par la voie diplomatique.

Le présent Traité entrera en vigueur trente jours (30) après la date de la réception de la deuxième des deux notifications par laquelle l'une des deux parties informe l'autre de l'accomplissement de ses procédures internes et aura une durée indéterminée. Le présent Traité demeure valable pur une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé à tout moment, par l'une des deux Parties par notification écrite, adressée à l'autre Partie par voie diplomatique. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la réception de ladite notification par l'autre Partie.

En foi de quoi, les plénipotentiaires dûment autorisés par leur Gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.

Fait à Buenos Aires, le 16 mai 2006, en deux exemplaires originaux, rédigés en langues espagnole, arabe et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte français prévaudra.

Pour la République Argentine

Pour la République Tunisienne